

AGENDA CIUDADANA

EL PARTIDO DE ESTADO O "LA COSA NUESTRA"

Lorenzo Meyer

!Vaya situación en la que nos encontramos los mexicanos al finalizar lo que se suponía iba a ser el sexenio de la "política moderna"! De un lado, una sociedad civil que, pese a sus notables esfuerzos por sacudirse el sojuzgamiento en que se le ha mantenido por siglos (según el marqués de Croix, los novohispanos era súbditos "que nacieron para callar y obedecer y no para discutir los altos asuntos del Gobierno"), aún es incapaz de defender sus derechos e imponer sus prioridades. Del otro, una sociedad política dividida a mitades entre lo nuevo y lo viejo; la parte nueva intenta -todavía sin mucho éxito-, organizarse fuera y en contra del partido de Estado; la otra, la vieja, la de siempre, la dominante, es la organizada como partido de Estado, como PRI. Esta última es autoritaria, está corrupta hasta la médula y se encuentra en crisis.

La crisis de la sociedad política vieja nos afecta a todos, a los mexicanos en conjunto. Todo indica que algunos de los priístas han renegado del principio central y único que da coherencia a su organización -la sumisión incondicional a las directivas de su jefe nato, el presidente de la República-, y dan señales de estar dispuestos a regresar a una especie de estado de naturaleza, ese donde la lucha es de todos contra todos, que puede ser a muerte, y donde el triunfo lo obtienen los que poseen más recursos y menos escrúpulos. Este estado de naturaleza es,

desde luego, la antítesis del estado de derecho al que aspiramos y que exigimos.

A la triste situación en que se encuentra México, no se llegó de un día para otro. Se necesitó de un largo período de maduración, es decir, de irresponsabilidad sistemática de las clases gobernantes, en particular de la élite.

Hace poco visitó nuestro país un grupo multinacional de militares miembros del Royal College of Defense Studies. Uno de ellos formuló una pregunta simple y lógica: "si en México hay una centralización extraordinaria del poder político en manos del presidente, entonces ¿porqué, en la práctica, no hay una acción igualmente centralizada, coordinada y eficaz contra el narcotráfico por parte del gobierno? ¿porqué hay un grado tan alto de corrupción en las diferentes instituciones armadas? La respuesta no es fácil pues, en efecto, a una presidencia todopoderosa como se supone -o suponía- que es -o era- la mexicana, debería corresponder un aparato de seguridad pública y del Estado tan centralizado y eficiente como, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, pero resulta que ese no es el caso.

En las historias clásicas de los cuerpos de policía de principios del siglo XX hasta la segunda guerra mundial, era frecuente encontrar esta dicotomía: Europa-Estados Unidos. En el país vecino del norte, la policía era, básicamente, una organización descentralizada, dependiente de las maquinarias políticas locales, y por ello bastante corrupta e ineficiente. En contraste, las policías europeas eran organizaciones muy centralizadas, burocratizadas, profesionales y eficientes.

Conviene subrayar que en esos modelos, eficiencia y democracia no iban de la mano; en realidad el sistema más democrático, el norteamericano, era el menos capaz de tener una policía digna de tal nombre. En los últimos cincuenta años la situación ha cambiado: los europeos se han democratizado y los norteamericanos tienen una policía menos corrupta y más eficiente. Sin embargo, en México nos las hemos arreglado para combinar lo peor de los dos esquemas clásicos: centralización y autoritarismo político por un lado, y corrupción galopante, falta de profesionalización y de eficacia en los aparatos de seguridad por el otro. ¿Cual es la explicación de tan peculiar fenómeno? En buena medida la historia, pero también la falta de voluntad de la fuerza centralizadora -la presidencia- para cumplir con una de sus obligaciones elementales: la de hacer de la seguridad de la sociedad el centro de la seguridad del Estado.

El Estado, en una definición simple, es la combinación de pueblo, territorio y gobierno. En sentido estricto, la seguridad del Estado debe abarcar, por tanto, a los tres elementos y en el orden enunciado, es decir, el pueblo primero. En México nunca ha sido ese el caso. Los aparatos de seguridad en nuestro país han funcionado, en primer lugar, para dar seguridad al gobierno, en particular al Ejecutivo, que cuenta con su propio Estado Mayor Presidencial y con un cuerpo de élite: las guardias presidenciales. La policía ha seguido la misma lógica: primero el gobierno. La seguridad territorial ha sido la segunda preocupación; en el siglo XIX y principio del XX, la frontera fue amenazada sobre todo en el norte; en tiempos reciente las

violaciones han tenido lugar, sobre todo, en el sur, donde de tarde en tarde ha incursionado el ejército guatemalteco. Lo que sistemática y concientemente se descuidado por parte de ejército y policía, es la seguridad del pueblo.

En 1982, y según un artículo de Rafael Ruiz Harrel, en el Distrito Federal, se cometían, en promedio, 1,295 delitos del orden común por cada cien mil habitantes. Seis años más tarde, al concluir el primer "sexenio de la modernidad", el promedio había aumentado a 1,682. Pero ahora, cuando toca a su fin el sexenio de la revolución neoliberal, el promedio es de 2,278: !un aumento del 76%! (Reforma, 3 de octubre).

Uno de los lemas de Ernesto Zedillo en su exitosa campaña presidencial, sugería que un voto por él, como candidato del PRI, era un voto por la paz. Los datos simplemente no avalan esa pretensión: las administraciones de donde sale el doctor Zedillo -donde se formó y donde asumió responsabilidades-, son las administraciones que no supieron darle paz y seguridad al ciudadano común y corriente. Al contrario, fue ahí donde se agudizó la guerra de la delincuencia (y de la policía) contra la sociedad. El episodio más significativo de violencia en los últimos tiempos, el estallido de la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, no es más que una reacción defensiva contra la violencia -y la impunidad- conque por mucho tiempo actuaron en esa región del país los caciques y los aparatos gubernamentales, nacionales y locales.

Lo que ya era una situación mala hoy dado un cambio cualitativo y se ha tornado peor. La inseguridad ha dejado de ser

el triste privilegio de la mayoría -de los sin poder- para abarcar también a la minoría rectora. La guardia en torno al propio presidente se ha redoblado; ya no hay seguridad para gobernantes ni para gobernados, hemos llegado a una siniestra democratización de la inseguridad.

A partir del asesinato de un cardenal el año pasado, de los asesinatos este año del candidato oficial a la presidencia y del secretario general del partido de Estado, y del secuestro de un famoso banquero, la inseguridad campea en lo alto y en lo bajo. La seguridad del Estado ha casi desaparecido, incluso en su definición más restringida y elitista, es decir, la seguridad del gobierno, de los que mandan.

En su clásico libro *La política del desarrollo mexicano* (1971), el finado politólogo norteamericano Roger D. Hansen, tituló así el capítulo quinto: "El PRI y la política mexicana: la cosa nuestra". Desde esta perspectiva, el PRI era tanto un sistema de organización del poder como un sistema de corrupción, basado en una elite gobernante autodesignada y a la que la sociedad no podía llamar a cuentas. Para el profesor Hansen, "la cosa nuestra" mexicana y la "cosa nostra" de la mafia, eran dos organizaciones exitosas que compartían un mismo espíritu aunque no aún el estilo. Ahora bien, creo que quien fuera miembro de la Asociación Nacional de Planeación de Washington, nunca sospechó que tan cerca de la mafia iban a llegar el PRI y la clase política mexicana en ese estilo de lucha interna: la eliminación violenta del rival o el asesinato como forma de enviar mensajes entre camarillas cuando se ha perdido la unidad, la disciplina.

Como bien lo señalara Raimundo Rivapalacio en un artículo, el partido del Estado nació en 1929 precisamente para evitar esa violencia interna tan disfuncional y contraproducente entre la nueva clase política (Reforma, 3 de octubre). Hasta ese momento, el crimen político había sido una forma común de la "familia revolucionaria" para resolver la disputa profunda por el poder. En efecto, el carrancismo ordenó el asesinato de Zapata; Villa fue asesinado en vísperas del levantamiento de De la Huerta y luego le tocó el turno a Francisco Field Jurado; los delahuertistas, por su parte, asesinaron a Felipe Carrillo Puerto; Obregón y Calles mandaron matar a sangre fría al general Francisco Serrano, etcétera. Llevaría tiempo cambiar las reglas; ya estaba en funciones el partido de Estado cuando se asesinó a Manlio Favio Altamirano -hecho que abrió la gubernatura de Veracruz a Miguel Alemán-, pero poco a poco se superó la costumbre de eliminar físicamente al rival interno y el presidente fue reconocido como el árbitro indiscutible en la lucha interna de la élite gobernante; sus órdenes fueron aceptadas al pie de la letra, y los perdedores las acataron sin chistar pero confiando en que, al final del sexenio, el péndulo de la fortuna se movería en su favor. Y así fue por mucho tiempo, pero hoy hay indicios de que el ciclo de paz interna que se inició en 1929 pudiera estar llegando a su fin; que el control de la gran maquinaria partidista -de la "cosa nuestra"-, ya no está como se suponía: firme en las manos presidenciales, y que puede reiniciarse la lucha violenta dentro de los laberintos del poder.

La situación, de por si grave, se complica porque en los últimos años ha surgido en México una fuerza nueva, con grandes cantidades de recursos a su disposición y que no se subordina al poder presidencial: el narcotráfico. La disolución de la Dirección Federal de Seguridad el sexenio pasado, fue el indicador objetivo de que los narcotraficantes ya habían penetrado a los aparatos de seguridad e inteligencia del gobierno a su nivel más alto. En sus declaraciones desde Washington, Eduardo Valle "El Búho", sugiere que el narcotráfico pudo ya haber penetrado al Estado Mayor Presidencial y al gabinete. En cualquier caso, con millones de dólares a su disposición, los jefes del comercio de drogas han podido romper varios eslabones en la cadena de obediencia y lealtad que une al aparato político mexicano con el presidente.

Si desde el inicio del siguiente sexenio no se toman medidas drásticas -en este campo al gobierno de Carlos Salinas lo podemos dar por concluido-, lo que ha pasado se volverá a repetir y con consecuencias más graves. Si las tendencias en materia de seguridad siguen la lógica que hoy ya tienen, el perdedor no será única ni principalmente el grupo gobernante, sino la parte central del Estado, su razón de ser: la sociedad mexicana.